



ERNESTO SÁNCHEZ
Diputado federal del PAN
@ErnestoSR_MX



El INE no se fortalece con declaraciones, se protege con hechos

Hay algo profundamente preocupante en la respuesta que ha ofrecido el Instituto Nacional Electoral frente a la salida de más de 800 trabajadoras y trabajadores de sus oficinas centrales en lo que va del año. No solamente por el hecho de que toda baja de personal implique, por sí misma, una crisis institucional, sino porque estamos hablando de una institución cuya fortaleza depende precisamente de contar con capacidades técnicas, profesionales y operativas suficientes para organizar elecciones confiables.

El INE sostiene que no hay motivo de alarma.

En voz de su Presidenta, el INE afirmó que se trata de trabajadores por honorarios y por proyecto vinculados a determinadas etapas del ciclo y aseguró que su capacidad para organizar el proceso electoral 2026-2027 está garantizada. ¿Qué hacían entonces las más de 800 personas despedidas?

No hay congruencia en afirmar que salen cientos de trabajadores, pero que la capacidad permanece exactamente igual, porque la capacidad técnica de una institución como el INE no se mide únicamente por el número de plazas, se mide también por las personas que ejecutan las tareas, procesan información, capacitan funcionarios, desarrollan sistemas, verifican procedimientos y hacen posible que la elección ocurra sin improvisaciones.

Una elección federal exige planeación, personal especializado, infraestructura tecnológica, capacitación, logística y capacidad de reacción, no se puede dismantelar una parte de la maquinaria y después pretender que, cuando llegue el momento, bastará con encenderla nuevamente.

Una elección federal exige planeación, personal especializado, infraestructura tecnológica, capacitación, logística y capacidad de reacción, no se puede dismantelar una parte de la maquinaria y después pretender que, cuando llegue el momento, bastará con encenderla nuevamente.

México no puede darse el lujo de llegar a 2027 con un árbitro electoral improvisado, debilitado, con menos personal especializado o con áreas estratégicas operando bajo esquemas que no permitan garantizar plenamente sus responsabilidades, y mucho menos aceptamos que las dudas legítimas que surgen en torno a estos movimientos se respondan diciendo que “todo está garantizado”.

Las instituciones democráticas se fortalecen con transparencia, profesionalismo y resultados verificables, no con declaraciones a la ligera.

El INE debe explicar, con datos, qué funciones realizaban esos más de 800 trabajadores, qué áreas quedaron afectadas, cómo se sustituyeron sus capacidades y cuál es el plan concreto para garantizar que la organización de las elecciones de 2027 no dependa de acciones emergentes.

Porque una cosa es concluir contratos temporales y otra muy distinta es permitir que, bajo esa justificación, se vaya reduciendo silenciosamente la capacidad operativa de una institución fundamental para nuestra democracia y que, desde luego, le beneficia al oficialismo.

El INE que tantos años nos costó construir le pertenece a los ciudadanos, no le pertenece a un gobierno y mucho menos al partido en el poder, por eso, exigimos que su estructura electoral se preserve, que su autonomía se respete y que en 2027 cada ciudadano vote con la certeza de que su voluntad será contada y defendida con capacidad institucional.

Y esta pregunta exige una respuesta firme e institucional: si más de 800 personas ya no están en el INE, **¿quién está haciendo hoy el trabajo que antes hacían? México no se improvisa y está en espera de la respuesta.** ■